

UAM-CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. Hoja Resumen

Título del Proyecto	Federalismo Fiscal y desarrollo económico de México. y otros países Bajo una óptica de justicia social.
Participantes	Dra. Aureola Quiñonez Salcido (Responsable del Proyecto) Departamento de Estudios Institucionales (DESIN) UAM-C Dra. Esther Morales Franco DESIN UAM-C Dra. Mariana Moranchel DESIN UAM-C Dra. Sandra Carrillo Andrés Departamento de Administración UAM-A Cuerpo Académico: Derecho, Administración e Instituciones
Pregunta de investigación	¿Cuál ha sido la incidencia del federalismo fiscal en el desarrollo económico en México y otros países en la última década?
Hipótesis	El federalismo fiscal de México ha presentado una alta concentración del gasto público en la federación, en tanto que, en otros países, existe una distribución más equitativa entre los estados o entidades durante el periodo 2010-2020, y ha favorecido el desarrollo económico en dichos países.
Objetivo	Analizar el federalismo fiscal y la incidencia en el desarrollo económico en México y otros países, mediante estudios comparativos de las políticas públicas del federalismo, la descentralización del gasto público federalizado al interior de cada entidad, para impulsar el desarrollo económico, bajo un enfoque de justicia social, con base en una perspectiva institucional, analizando la normatividad vigente e histórica en diversos países, los procesos establecidos para la distribución del gasto público que permita cubrir necesidades básicas de la población establecidas como un derecho humano.
Duración	3 años (2021-2024)

Protocolo del proyecto:**Federalismo Fiscal y desarrollo económico de México. y otros países
Bajo una óptica de justicia social.****Resumen**

El objetivo de la presente investigación es evaluar la incidencia del federalismo fiscal en el desarrollo económico en México y otros países en la última década, mediante estudios comparativos de la descentralización del gasto público al interior de cada uno, con base en una perspectiva institucional, analizando la normatividad vigente e histórica en diversos países, los procesos establecidos para la distribución del gasto público que permita cubrir necesidades básicas de la población establecidas como un derecho humano de la distribución del gasto federalizado en los estados o entidades de los países desarrollados, respecto a los niveles de desarrollo económico de cada país y a través del análisis de las políticas públicas establecidas para impulsar el federalismo fiscal y el desarrollo económico, bajo un enfoque de justicia social, con el fin de evaluar el desarrollo de un federalismo fiscal equitativo, a través de indicadores económicos y sociales de la población. Como hipótesis se considera que El federalismo fiscal de México ha presentado una alta concentración del gasto público en la federación, en tanto que, en otros países, existe una distribución más equitativa entre los estados o entidades durante el periodo 2010-2020, que ha favorecido el desarrollo económico en dichos países. El resultado de la investigación permitirá identificar las distintas formulas establecidas para la distribución del gasto federalizado y emitir recomendaciones para una distribución más equitativa en las entidades federativas de México.

Participantes: Cuerpo Académico: Derecho, Administración e Instituciones

Dra. Aureola Quiñonez Salcido (Responsable del Proyecto) Departamento de Estudios Institucionales (DESIN) UAM-C

Dra. Esther Morales Franco DESIN UAM-C

Dra. Mariana Moranchel DESIN UAM-C

Dra. Sandra Carrillo Andrés Departamento de Administración UAM-A

Federalismo Fiscal y desarrollo económico de México Bajo una óptica de justicia social

Planteamiento del problema

El federalismo fiscal de México se ha presentado en diversas fases, en la búsqueda de crecimiento económico y equidad social en las entidades federativas, por ello, este proyecto tiene por objeto analizar el federalismo fiscal de México y sus efectos en el desarrollo económico, a través del estudio histórico del federalismo, desde una perspectiva institucional partiendo de las distintas reformas constitucionales y legislativas, analizando las políticas públicas para impulsar el federalismo fiscal y el desarrollo económico, bajo un enfoque de justicia social, con el fin de evaluar el desarrollo de un federalismo fiscal equitativo, a través de indicadores económicos y sociales de la población.

En México el surgimiento del Estado federal se origina mediante la expedición de la Constitución Federal de 1824, en cuyo artículo 4º se estableció que la “Nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal”. Sin embargo, como consecuencia de la inestabilidad política que existió en México durante el segundo tercio del siglo XIX, provocó que varias entidades federativas generaran rupturas sobre todo en materia fiscal.

No fue sino hasta la Constitución de 1857 cuando quedó establecido definitivamente la estructura del Estado federal mexicano en el artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación según los principios de esta ley fundamental”. Dicho artículo fue incluido en la Constitución Política de 1917 con ligeras variaciones en el año de 2012.

Si bien es cierto que el texto constitucional comprende un sistema estatal de federalismo en varios ámbitos, para el caso que nos ocupa, únicamente analizaremos la materia fiscal. En concreto, en materia impositiva, el sistema federal en México se ha desarrollado de manera muy compleja a través del principio de competencia normativa, en donde la Constitución establece sobre qué aspectos puede legislar la federación y en qué materias pueden intervenir las entidades federativas (Carbonell: 2003: 382).

Nuestra Carta Magna no señala una clara delimitación de competencias en materia fiscal, se trata más bien de un sistema integrado por tres reglas: 1) Concurrencia contributiva de la federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (arts. 73 fracción VII y 124); 2) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante reserva de ciertas materias a favor de la federación (art. 73 fracción XXIX); y, 3) Restricciones expresas a los Estados en materia tributaria (art. 117, fracciones IV,V,VI y VII, y 118 fracción I).

Pero estas reglas no fueron del todo homogéneas entre la Federación y las entidades federativas. La propia Constitución estableció cierto grado de discriminación a favor del gobierno federal en lo relativo a la recaudación de algunos impuestos. Con el tiempo estas disposiciones constitucionales generaron numerosos conflictos, por lo que a raíz de la intervención de la Suprema Corte de Justicia fue necesario reconocer que los Estados no debían imponer tributos a determinadas materias, sobre todo aquellas que quedaron reservadas de manera exclusiva a la Federación, por ejemplo, los productos del subsuelo, lo relativo a las vías generales de comunicación o las instituciones de crédito, aduciendo que si el Congreso de la Unión reservaba para sí el legislar sobre dichas materias, tenía por tanto la potestad exclusiva de gravarlas (Núñez: 1981: 86).

Tal como menciona José María Serna (2004: 10) a partir de la Constitución de 1857, el régimen de distribución de concurrencias entre la federación y los Estados

federativos, generalizó la práctica de la doble o triple tributación¹, provocando importantes daños a la actividad económica del país, sobre todo porque los contribuyentes quedaron obligados a pagar numerosos impuestos según en la región del país en donde residieran.

Con el fin de paliar los efectos ocasionados por esta concurrencia impositiva fue necesario establecer una coordinación fiscal entre los poderes de la Unión. Para lograrlo, la Federación, las entidades federativas y los municipios debieron de participar en tres Convenciones Nacionales Fiscales, las cuales fueron celebradas en los años de 1925, 1933 y 1947.

La Primera Convención recomendó un reparto provisional de facultades entre la federación y las entidades federativas². Pese a que no se lograron todos sus objetivos, al menos quedó plasmada la idea de la participación de las entidades

¹ La Constitución de 1857 en la fracción VII del artículo 72 señalaba que “VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la federación que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo”. Por su parte la Constitución de 1917 en la fracción VII del artículo 74 señaló como facultades exclusivas del Congreso de la Unión “Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto”. De lo anterior se deriva, que aún en el Constituyente de 1917 no había una preocupación por señalar la distribución de competencias en materia fiscal entre la Federación y las entidades federativas.

² La Convención se llevó a cabo del 10 al 20 de agosto y fue convocada por decisión del Presidente, Plutarco Elías Calles a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Alberto José Pani Arteaga. A cada uno de los gobernadores se les solicitó nombrar a un delegado con poderes bastantes y suficientes. Entre los acuerdos a los que se llegó fueron: a) los impuestos sobre la tierra y los edificios serían exclusivos para los Estados; b) los Estados podrían gravar de forma exclusiva los actos no mercantiles, sobre las concesiones otorgadas por autoridades locales y sobre los servicios públicos locales; c) la Federación en exclusiva gravaría sobre el comercio y la industria, pudiendo los estados participar en el producto de estos impuestos de acuerdo con una tasa uniforme para todos; d) los impuestos sobre herencias y donaciones serían exclusivos para los Estados, pudiendo participar la Federación conforme a bases uniformes; e) debía tratarse de forma separada los impuestos especiales, debiéndose decidir la forma de participación de los Estados y de la Federación; f) debía agregarse una nueva cédula a la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de gravar el ingreso de los bienes inmuebles edificados, cuyo producto debía ser exclusivo para los Estados. Vid. José María Serna, 2004: 11-12. Las conclusiones surgidas de la Convención fueron propuestas mediante reformas a las Constitución en sus artículos 117, fr. III; 118 y 131, y adiciones al 74, que habían de dar pie a una distribución de potestades privativas a cada orden de gobierno y que, a su vez, establecieran con claridad aquellas potestades concurrentes. En diciembre de 1926, el presidente Calles envió las iniciativas para reformar los artículos mencionados, pero el Congreso de la Unión no las reformó. Sin embargo, el ejecutivo decidió reformar la Ley Vid. Reyes Tépac, 2004: 12 y ss.

federativas de los ingresos producidos por impuestos cobrados por la Federación y viceversa.

Por su parte, la Segunda Convención Nacional Fiscal³ celebrada en 1933 tuvo varios objetivos, entre ellos, resolver el problema de la escasa productividad de los impuestos y tratar de promover el desarrollo económico del país evitando la continuidad del sistema tributario complejo y oneroso. Pero todos los acuerdos alcanzados prácticamente no pudieron materializarse en reformas legislativas, debido por un lado al final del período presidencial, y en segundo lugar, porque en medio de la Segunda Guerra Mundial, los problemas hacendarios quedaron relegados a un segundo plano (Reyes Tépac, 2004: 18). Sin embargo, uno de los grandes anhelos de las entidades federativas quedó plasmado en la reforma a la fracción X del artículo 73 Constitucional, relativa a la participación de los Estados y municipios al rendimiento de los impuestos que el Congreso Federal establezca sobre energía eléctrica en la proporción que las autoridades federales locales respectivas acuerden⁴.

En el año de 1947 el presidente Miguel Alemán convocó la Tercera Convención Nacional Fiscal⁵, siendo su objetivo principal la creación de una coordinación fiscal

³ La Segunda Convención fue convocada por el presidente Abelardo L. Rodríguez, por mediación del Secretario Pani y se celebró entre el 20 de febrero y 11 de abril de 1933. Entre las conclusiones que se tomaron en esta reunión fueron: a) la base de tributación local debía ser la imposición territorial, excluyendo los inmuebles de propiedad Federal o de los municipios destinados a servicios públicos o vías generales de comunicación. Debía gravarse tanto la propiedad urbana, como la rural, edificada o no; b) los Estados debían tener poder tributario exclusivo sobre actos no mercantiles que tuvieran lugar en sus jurisdicciones; c) los Estados debían tener poder tributario exclusivo sobre servicios municipales y sobre concesiones otorgadas en su jurisdicción; d) la Federación tendría derecho exclusivo sobre el comercio exterior, sobre la renta y sobre la industria, debiendo participar en sus productos tanto los estados como los municipios; e) gobierno federal debe tener poder tributario exclusivo y aprovechamiento exclusivo de rentas relativas a la explotación de recursos naturales y sobre los servicios públicos concesionados por la Federación; f) sería exclusivo para los Estados los impuestos derivados de herencias y donaciones, debiendo participar la Federación de dichos productos. Vid. José María Serna, 2004:12-13.

⁴ Reforma de 18 de enero de 1934. Texto que quedó insubsistente a partir de la reforma a la fracción X y a la adición de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional mediante decreto de reforma de 1 de noviembre de 1942 y que entraría en vigor el 1 de enero de 1943.

⁵ Se celebró del 10 al 20 de noviembre, siendo el Secretario de Hacienda el Lic. Ramón Beteta. Entre los objetivos más importantes de esta reunión fueron los siguientes: a) trazar el esquema de un sistema nacional de distribución de todos los gastos públicos entre todos los contribuyentes mediante la creación de un Plan Nacional de Arbitrios; b) establecer la forma en que la Federación, los Estados

entre los tres ámbitos de gobierno a fin de lograr la unificación económica nacional, provocado, en gran parte, por la insuficiencia de ingresos de los estados y municipios.

Como resultado de esta reunión fue promulgado en el año de 1948 la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, pudiendo cobrar los Estados hasta un 1.2% de dichos ingresos, y recibir el 10% sobre la participación existente entre otros impuestos federales. En ese mismo año se promulgó la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas y se creó la Comisión Nacional de Arbitrios para operar como órgano consultor y gestor del pago oportuno de las participaciones.

Cinco años más tarde, en el año de 1953, se promulgó la primera Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, en la que se suspendieron los procedimientos alcabalatorios del país. Bajo el amparo de esta ley quedaron coordinadas solamente dieciocho Estados. En 1973 mediante la reforma a la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles quedaron integrados a esta coordinación fiscal todas las entidades federativas, con una tasa única del 4%, en lugar de la tasa para entidades coordinadas que existía del 1.2% y del 1.8% de la tasa federal.

Hacia los años setentas el presidente Luis H. Echeverría no logró convocar la Cuarta Convención, en su lugar desde el año de 1972 se organizaron las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales con periodicidad anual. Fueron veintiocho reuniones, celebrándose la última en el año de 1996⁶.

y los municipios se distribuyeran los ingresos de acuerdo con su capacidad de control, sin que implique el derecho de aprovechar privativamente los rendimientos de los gravámenes que establezca o recaude cada autoridad: c) determinar la base de colaboración entre las autoridades fiscales a fin de lograr un entendimiento entre ellas y los particulares para reducir los costos de recaudación y control de los impuestos, para aprovecharlos en beneficio de las necesidades colectivas. Vid. José María Serna, 2004: 18-19.

⁶ Sobre el contenido de las distintas Reuniones Vid. Saucedo, 1997, pp. 82 y ss.

En el año de 1978 se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) a través de la cual se creó un sistema participación basado en la conformación de un Fondo General de Participaciones, esto es, integrado por los ingresos que obtiene la Federación por el cobro de sus impuestos, cuya distribución, a manera de asignación global se realiza entre las entidades federativas y los Municipios, atendiendo al número de habitantes de los Estados y al porcentaje en que hubieran participado éstos durante el ejercicio anterior.

Con la creación de esta ley se buscó evitar doble tributación, ya que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aceptaron renunciar al establecimiento de contribuciones que graven hechos o actos jurídicos ya gravados por la Federación.

La cooperación fiscal se presenta en dos ámbitos: primero, con la potestad tributaria de la entidad los Convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal⁷ y segundo, en relación con la administración tributaria de los impuestos federales participantes mediante la firma de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal⁸.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se propuso impulsar el federalismo para fortalecer los Estados y los municipios, fomentando la descentralización y el desarrollo regional, así como la modernización de la

⁷ Instrumento jurídico se celebra entre el gobierno federal y las entidades federativas para formalizar su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, obligando a los Estados a suspender los ingresos locales y municipales contrarios a dicho sistema. Como prestación, las entidades al igual que sus municipios reciben a cambio las participaciones en ingresos federales que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Dichos convenios son adicionados o modificados por los denominados "Anexos" y tanto éstos como el propio convenio deben ser aprobados por las respectivas Legislaturas Locales. Vid. <http://hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/28/pdf/2.2.pdf>

⁸ Convenios que regulan las funciones de recaudación, fiscalización y administración que son ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades federativas o de los municipios cuando así se pacte expresamente. A través de estos acuerdos, el gobierno federal delega facultades de administración de ingresos federales, ya sea para ejercerlas directamente por el estado o a través de sus respectivos municipios. Dicho instrumento se modifica o adiciona a través de acuerdos, o anexos y comprende, entre otras, las funciones de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), recaudación, comprobación determinación y cobro. En el cuerpo de este instrumento se establecen los incentivos¹ que se perciben por la administración. Loc. Cit.

administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas. En su Plan Nacional de Desarrollo se reconoció que la renovación del federalismo favorecería la adecuada organización política y la democracia. Se estableció reformar el Sistema de Coordinación Fiscal para fortalecer el federalismo, reforzando el apoyo a las zonas marginadas o de menores recursos.

En el plan del presidente Zedillo, se reconoció que las decisiones y funciones gubernamentales se encontraban centralizadas en exceso, lo que provocaba el deterioro del bienestar general de la sociedad. Asimismo, señaló que tanto los fenómenos demográficos, como los desequilibrios económicos se habían atribuido a la planeación y operación de los servicios básicos del gobierno para fomentar la economía y ordenar el crecimiento. Se estableció como meta para 1998, que el Gobierno Federal solo mantuviera la función rectora en la política de combate a la pobreza. Para ello, en 1997 adicionó el capítulo V relativo a los Fondos de las Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal.

La inclusión del capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal mostró el establecimiento de políticas públicas de descentralización del gasto público federal que consideran fenómenos socioculturales con incidencia en la equidad y la justicia social, destacando la obligación del Estado de planear y ejecutar su gasto atendiendo los problemas económicos y sociales del país.

La Ley de Coordinación Fiscal ha sufrido varias reformas referidas de tal forma que la estructura del gasto federalizado actual se presenta en dos principales Ramos: el 28 referido a las Participaciones Federales y el 33 relativo al Fondo de Aportaciones Federales.

El ramo 28 de participaciones federales está integrado por nueve rubros: 1) Fondo general de participaciones, 2) Fondo de fomento municipal, 3) Fondo de extracción de hidrocarburos, 4) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 5) IEPS de gasolina, 6) 0.136 de la Recaudación Federal Participable, 7) derecho

adicional sobre la extracción de petróleo, 8) Impuestos Sobre Automóviles Nuevos y 9) incentivos económicos.

El fondo general de participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal participable (RFP) obtenido por la federación durante un ejercicio fiscal, considerando que esta recaudación considera los impuestos gravados por la federación, con excepción de los ingresos del impuesto de la renta derivado de contratos y asignaciones para la exploración de hidrocarburos, así como el gravado por concepto de salarios de servicio personal subordinado causado por servidores públicos de la federación en entidades federativas y municipios; los impuestos por adquisición de automóviles nuevos y de producción y servicios que participen en entidades federativas. Adicionalmente, la RFP la integra el 80.29% de los ingresos petroleros del Gobierno Federal.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución del fondo general de participaciones a las entidades federativas está en función de las participaciones recibidas por los estados en el año 2007, la variación del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), la recaudación de los impuestos de cada entidad federativa y la población, dando mayor peso a la variación del PIBE.

El Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Federales lo integran ocho fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS); 3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM); 5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASPDF); y 8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFE).

En el Ramo 33 de las aportaciones federales, el principal fondo es el de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo (FONE), determinado principalmente por la variación de lo asignado en periodos anteriores, el gasto de operación presupuestado en cada entidad federativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 y el número de niños en edad de cursar educación básica (matrícula potencial nacional) y la relación del número de habitantes entre 5 y 14 años de edad de cada entidad federativa, respecto a la del país.

Las participaciones federales tienen un carácter discrecional en su ejecución y los recursos federales se proporcionan en mayor medida a las entidades federativas con mayores recursos, en tanto que las aportaciones federales tiene un carácter condicional en su ejecución y se destinan principalmente, a las entidades con mayor número de población y en condiciones de pobreza.

Pregunta de investigación

¿Cuál ha sido la incidencia del federalismo fiscal en el desarrollo económico en México y otros países en la última década?

Hipótesis

El federalismo fiscal de México ha pasado por un largo proceso de reformas, para impulsar el desarrollo económico y justicia social de las entidades federativas de la justicia social, sin embargo, se ha propiciado una alta concentración de las Participaciones federales, mostrando una alta relación con el Producto Interno Bruto Estatal, a pesar de que las Aportaciones federales son distribuidas para disminuir los niveles de marginación y rezago social.

Objetivos

General

Analizar el federalismo fiscal y la incidencia en el desarrollo económico en México y otros países, mediante estudios comparativos de las políticas públicas del federalismo, la descentralización del gasto público federalizado al interior de cada entidad, para impulsar el desarrollo económico, bajo un enfoque de justicia social, con base en una perspectiva institucional, analizando la normatividad vigente e histórica en diversos países, los procesos establecidos para la distribución del gasto público que permita cubrir necesidades básicas de la población establecidas como un derecho humano.

Específicos

- Teorías y aportaciones de Federalismo fiscal
- Federalismo fiscal en otros países
- Análisis histórico del federalismo fiscal de México y otros países
- Crecimiento y desarrollo económico de México y otros países (2010-2022)
- Federalismo fiscal, desarrollo económico y políticas públicas para el cumplimiento de derechos humanos de la población

Metodología

Primero se realizará una revisión teórica y legal del federalismo fiscal, posteriormente se comparará el federalismo fiscal en otros países, se analizarán los componentes de cada uno de los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, se revisará las bases de datos de la descentralización del gasto público y de indicadores económicos y de bienestar social, de los países en comparación, que permitan identificar las acciones públicas que permiten un federalismo que impulse el desarrollo económico y la justicia social de México.

Responsable del Proyecto Dra. Aureola Quiñónez Salcido UAM-C

Participantes

Dra. Esther Morales Franco UAM-C

Dra. Mariana Moranchel
UAM-C

Dra. Sandra Carrillo Andrés
UAM-A

III. Plan de Trabajo

Cronograma de trabajo

Producto	2021 Feb-Dic	2022 Ene-Dic	2023 Ene-Dic
Participación en congresos nacionales e internacionales			
Organización de eventos relacionados con políticas públicas y federalismo fiscal			
Publicación en revistas especializadas de los hallazgos como resultado de la investigación.			
Publicación de libro electrónico de la evaluación del Federalismo Fiscal de México			

Justificación

La normatividad vigente del federalismo fiscal de México considera un sistema de gasto descentralizado con una orientación redistributiva de la riqueza, beneficiando a los estados que más aportan a la Federación, pero también a las entidades con mayores necesidades económicas y sociales.

La evaluación de la distribución de los recursos fiscales entre diversos países requiere la recopilación de la información tanto teórica como las bases de datos de indicadores económicos y sociales de México y de los países de América, en un

primer nivel, para posteriormente analizar países de Europa, por lo que se requieren de por lo menos tres años para cumplir con la investigación, periodo en el que se integrarán diversos productos de trabajo.

Productos de investigación esperados:

- Participación en congresos nacionales e internacionales
- Organización de eventos relacionados con políticas públicas y federalismo fiscal
- Publicación en revistas especializadas de los hallazgos como resultado de la investigación.
- Publicación de capítulo en libros electrónicos de la evaluación del Federalismo Fiscal de México y otros países

Vinculación con Servicio Social

Actualmente no existe vinculación con Servicio Social, pero se pretende someterlo posteriormente a aprobación.

Fuentes de financiamiento

Ninguna